

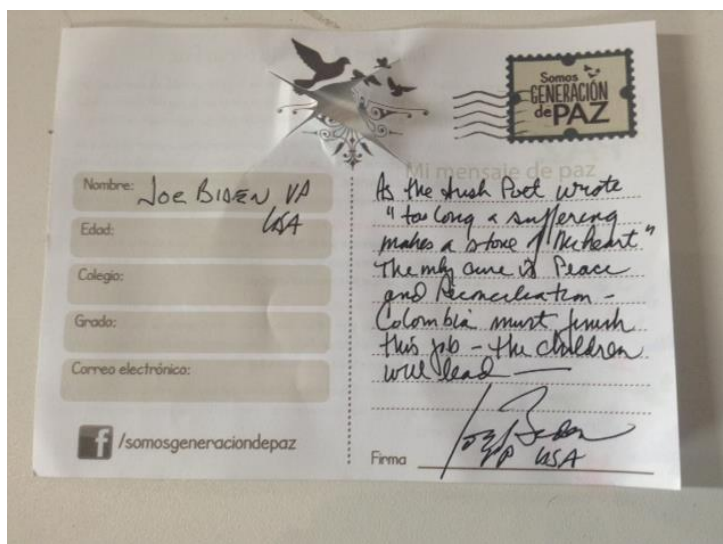
Un nuevo diálogo con Joe Biden y contra la antidiplomacia de Donald Trump

Camilo González Posso -Presidente de Indepaz

Bogotá D.C. 19 de enero de 2021

En junio de 2014 Joe Biden visitó a Colombia en calidad de vicepresidente y mensajero de Obama para dar una señal de respaldo a las negociaciones de paz que avanzaban en La Habana. En medio de su agenda le dio importancia a dejar un mensaje de solidaridad con las víctimas y a las iniciativas por la paz y para ello visitó en compañía de sus nietos el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Allí lo recibimos con Gonzalo Sánchez, Paula Gaviria, Ana Teresa Bernal y me correspondió, como director que era de ese Centro, agradecer la visita y el mensaje que dejó en una instalación llamada Árbol de la Vida, Generación de Paz. El texto de su mensaje es elocuente:

Como dijo el poeta holandés: “un sufrimiento muy largo nos da un corazón de piedra. La única cura es La Paz y la reconciliación” - Colombia debe terminar este trabajo - los niños nos mostrarán el camino- Joe Biden. Vice Presidente. USA



Los jóvenes que lideraban ese movimiento en Bogotá, con el decidido respaldo de Oscar Sánchez, Secretario de Educación, colocaron en el árbol ese mensaje de Biden. Y a mi me correspondió el discurso en el cual destacué el sentido de este Centro y del memorial construido con aporte de testimonios y puñados de tierra por familiares y amigos de más de 40.000 víctimas:

“Señor vicepresidente Joe Biden, le agradecemos el mensaje que ha dejado en el Árbol de La Paz y nos sentimos honrados con la decisión de su nieta y su nieto de dejar unas palabras en este árbol que forma parte de un gran bosque de 250.000 mensajes que mandaron jóvenes de Bogotá respaldando las conversaciones de paz que se hacen en La Habana. Árboles como este se han llenado de hojas con mensajes de paz y hoy se encuentran en bibliotecas y colegios. En este Memorial quedará el registro de su compromiso con la paz de Colombia”



En reunión con el presidente Santos, Joe Biden reiteró el apoyo de Washington a las negociaciones de paz señalando que: “Así como Estados Unidos apoyaba a los líderes colombianos en los campos de batalla, lo apoyamos a usted plenamente en las mesas de negociaciones para que termine el conflicto de 50 años del país”. Como lo recordó después en 2018, en la conferencia que dictó en la Universidad de los Andes, Joe Biden ha seguido de cerca la situación de Colombia desde hace décadas y en este siglo como “arquitecto del Plan Colombia” al lado de otros en el Congreso de los Estados Unidos. En 2016 Biden fue impulsor del programa *Paz Colombia* llamado a ser el replanteamiento de la cooperación de Estados Unidos en la fase de construcción de los acuerdos de paz. Se conoció también como el plan de los tres pilares y en cierta medida ha sido la matriz de la política bipartidista de Estados Unidos para la situación de Colombia en el posacuerdo.

EL NUEVO DIÁLOGO INTERNACIONAL DE APOYO A LA PAZ MÁS COMPLETA EN COLOMBIA

Esos pilares del plan Paz Colombia, siguieron en la mente de Joe Biden, si nos atenemos a sus palabras en la mencionada conferencia en la Universidad de los Andes, cuando en condición de exvicepresidente y posible candidato, habló del futuro de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. En lo relativo a Colombia su atención se centró en el tema del narcotráfico y en la necesidad de una política de oportunidades para los pequeños cultivadores de coca.

“El raciocinio subyacente – dijo Biden - siempre fue que hay una gran parte de Colombia que vivía en lo que en Estados Unidos llamamos el más allá, áreas que no han tenido protección estatal durante décadas y ha estado siempre bajo el control de las FARC u otros... La cuestión es ¿como pasar de 400.000 (sic) hectáreas cultivadas a cero?, La respuesta: hoy hay que enfrentar a los narcotraficantes y a los terroristas...No hay soluciones fáciles, en estas partes del país no hay infraestructura no hay electricidad, ¿que oportunidades están dando a los

cultivadores de coca? Eso es lo que hay que resolver (...), mientras tanto esas regiones no se pueden dejar a la deriva y dejar que las personas encuentren alternativas por sí mismas, pero eso es un proceso a largo plazo. (...). En esto es en lo que se debe enfocar el gobierno de Colombia, tiene que erradicar... mientras tanto los EE. UU. y otros tenemos que respaldarlos con los recursos económicos para darle oportunidades y alternativas a estas regiones; todo comienza con infraestructura, con los bienes básicos... pero es un proceso de largo plazo, doloroso, difícil”.

El señor Bernard Aronson, delegado de Estados Unidos que acompañó las conversaciones en La Habana y la firma del pacto de paz con las FARC EP, seguro que fue vigilante que se cumplieran ciertos mínimos soportados por los Estados Unidos como justificación de su involucramiento activo en la guerra en Colombia. Aceptaron que ese pacto fuera más que un acta de sometimiento y que se requirieran mínimas reformas políticas, de la ruralidad, la justicia y los derechos de las víctimas. Aceptaron que se hiciera un replanteamiento a la política antidrogas para buscar una visión actualizada en sintonía con evaluaciones de organismos internacionales que insisten en un enfoque sanitario y de derechos humanos.

Desde el otro lado, se aceptó que se incluyera la erradicación concertada acelerada, (en lugar de la gradual que pedían los campesinos), como primer paso hacia el despliegue de planes integrales de sustitución y medidas de reforma rural, de tierras, territorios y producción.

Con ese esquema el gobierno y los excombatientes de las FARC, en los primeros días de la implementación del acuerdo convocaron a los pequeños productores de las zonas cocaleras de mayor influencia de las FARC a suscribir pactos colectivos y familiares de sustitución con un paquete de retribución a quienes en pocos meses hicieran la completa erradicación de sus cultivos y firmaran los contratos para iniciar en el primer año proyectos productivos de seguridad alimentaria y en el segundo proyectos de mediano alcance, a la par del inicio de medidas de reforma rural y de acceso a tierra. La oferta incluyó inversiones en infraestructura, bienes básicos y avances en los planes territoriales de mayor alcance transformador.

Lo notable fue que en sólo seis meses suscribieron los pactos colectivos 120.000 familias, firmaron contratos de los Planes a Acción Inmediata PAI) 99.000 familias y al terminar 2017 otras 100.000 ya habían manifestado su voluntad de incorporarse al programa.

Inició el PAI y los campesinos erradicaron a velocidades insospechadas cumpliendo lo pactado mientras la verificación a cargo de la UNODC intentó, sin los suficientes recursos, ir a la misma velocidad; por su lado el gobierno fue desbordado por el tsunami de los pequeños productores cocaleros hacia la legalidad.

En medio de esta carrera contra el tiempo, la lentitud e insuficiencia de la acción estatal y del gobierno le dejó espacio a la veloz recomposición de las mafias narcotraficantes y a la reconfiguración de grupos armados.

La presión desde Estados Unidos en lugar de ayudar a la implementación de los acuerdos se volcó a las exigencias de erradicación forzada a cargo de las fuerzas armadas, que se dejó sentir en contravía de los pactos de sustitución y se volvió ultimátum en la administración de Donald Trump.

Es de esperar que la agenda de un nuevo diálogo con Biden retome el sentido de lo firmado en materia de política antidrogas y erradicación de cultivos de uso ilícito. Eso significa que Estados

Unidos por la presión unilateral que puso en marcha Trump para una erradicación forzada y copiamiento militar de zonas, en contravía de lo definido en el pacto de paz que incluye varias estrategias y supone que en lo internacional se den pasos hacia una nueva política multidimensional y de corresponsabilidad.

VÍAS DIPLOMÁTICAS PARA LA PAZ

La paz de Colombia requiere la colaboración de la comunidad internacional y el apoyo de los países amigos de la solución negociada, tal como se mostró en las conversaciones con las FARC y con el ELN. El gobierno de Iván Duque- uribismo se alineó con la antidiplomacia de Trump que promovió una nueva doctrina Monroe para enfrentar la competencia “de potencias extracontinentales”.

Un ejemplo de esa antidiplomacia es la decisión de Trump, en las últimas horas de su gobierno, de incluir a Cuba en la lista de países que apoyan al terrorismo; semejante acusación no tiene fundamento ni en hechos comprobados, ni en la política de Cuba que desde hace muchos años condena el uso de las armas en política y rechaza la lucha armada supuestamente revolucionaria en América Latina.

La nueva administración de Joe Biden tiene elementos para constatar que Cuba ha sido un colaborador transparente de la búsqueda de la paz en Colombia. Desde Indepaz lo hemos registrado por haber participado en varios procesos con sede en La Habana, incluidos los intentos de negociación con el ELN durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. También se ha dicho que Cuba con sus declaraciones ayudó a convencer a las FARC de dejar las armas y mostró su colaboración con la paz cuando abrió las puertas para las exploraciones con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el presidente de Ecuador pidió que los negociadores salieran de Quito a otro país.

No se le puede cobrar a Cuba la permanencia en su territorio de la delegación del ELN a esas negociaciones que el actual gobierno suspendió, pues con Colombia pactó, junto con Noruega, Chile y otros acompañantes, que en caso de suspender o dar por terminados los diálogos se aplicaría un protocolo de retorno de esos voceros. No ayuda a la paz de Colombia y de la región que Estados Unidos coloque a Cuba del lado del terrorismo con las consecuencias que eso tiene en escalamiento de vías no diplomáticas para la solución de diferencias.

De manera similar el uso de vías no diplomáticas, para apoyar vías de hecho contra el régimen de Maduro en Venezuela, es una estrategia fracasada de respaldo a un fantasmagórico gobierno encabezado por Guaidos. El bloqueo a Venezuela, con entrega de bienes de ese Estado para uso discrecional de la oposición y medidas de asfixia económica, es un factor de peso en la salida de millones de personas, de las cuales cerca de 3 millones han emigrado a Colombia en condiciones de miseria. No se puede desconocer la responsabilidad del gobierno de Maduro, ni ocultar las maniobras electorales, ni las medidas autoritarias, pero el camino de las agresiones y vías no diplomáticas promovidas desde Estados Unidos es de imposición y sacrificio para todo un pueblo que es castigado por la mayor potencia económica del mundo en aras de defender intereses económicos y de contrarrestar la competencia por el petróleo y otros recursos.

Es de esperar que J. Biden tome distancia de esas políticas extremistas de D. Trump con respecto a Cuba y Venezuela y retome el camino que diseñó como vicepresidente de Obama que era de distensión y búsqueda de nuevos términos con Cuba.

También con Venezuela se impone un giro hacia soluciones dialogadas y autónomas de los venezolanos, que son tan atacadas por la extrema derecha que desde La Florida; ha sido demostrado que promueven incursiones armadas y presencia de paramilitares para intervenir en Venezuela, utilizando como plataforma de entrenamiento bases en Colombia, tal como se puso en evidencia en La Guajira. Esos promotores de soluciones militares en Venezuela son los mismos que se aliaron con la extrema derecha colombiana para influir a favor de Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que ahora mandan consejos a Biden para que declare a Cuba como aliado de terroristas y a Venezuela como objetivo de intervención militar y de operaciones encubiertas.

Son muchos los temas de la agenda para un diálogo útil para la paz en Colombia y la región que pueden marcar nuevos énfasis en la política de Biden y del Congreso de los Estados Unidos en la nueva situación. Y aquí digo énfasis para no crear expectativas sobre un giro radical en la política bipartidista; pero pequeños matices también hacen diferencia como se ha mostrado cuando en Washington han incidido las voces que reclaman exigencias y controles estrictos para que la asistencia militar no sea cómplice de abusos en derechos humanos, corrupción y complicidad con el paramilitarismo.